

[Club Sportivo Ben Hur \(TF 23906-I\) c/ DGI](#)

**Voces:** [APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY](#) - [DELEGACIÓN LEGISLATIVA](#) - [TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN](#) - [HECHO IMPONIBLE](#) - [AFIP DGI](#) - [EXENCIONES TRIBUTARIAS](#) - [IMPUESTO A LAS GANANCIAS](#) - [DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD](#) - [PRINCIPIO DE LEGALIDAD](#) - [APLICACIÓN DE LA LEY](#)

**Partes:** Club Sportivo Ben Hur (TF 23906-I) c/ DGI s/

**Tribunal:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

**Sala/Juzgado:** V

**Fecha:** 19-abr-2007

**Cita:** MJ-JU-M-11978-AR | MJJ11978 | MJJ11978

No puede convalidarse la derogación de una exención a través de un decreto, siendo el poder legislativo el único órgano facultado para hacerlo.

#### Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal y dejar sin efecto la resolución nº 168/03 -mediante la cual la AFIP reajustó la obligación impositiva frente al Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 10/02 a 05/2003, liquidó intereses resarcitorios e impuso una multa en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683- y **declarar inconstitucional el artículo 1º de la ley 25.414 en cuanto delegó la facultad de derogar exenciones** -y por consiguiente el decreto 493/01 -toda vez que, atento al principio constitucional de reserva de ley nullum pena sine legem , **no puede convalidarse la derogación de una exención a través de un decreto, siendo el poder legislativo el único órgano facultado para hacerlo.**

#### Fallo:

Buenos Aires, 19 de abril de 2007.-

#### Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que a fs 43/45vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió por mayoría confirmar la resolución dictada con fecha 3 de septiembre de 2004 de la AFIP Dirección General Impositiva mediante la cual se determinó de oficio la obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 10/02 a 05/2003, se liquidaron intereses resarcitorios y se impuso una multa en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683.

II. Que a fs. 51 interpuso recurso de apelación la parte actora y expresó agravios a fs. 59/02, los cuales fueron contestados a fs. 73/76vta.

A fs. 57 interpuso recurso de apelación la parte demandada y expresó agravios a fs. 63/64vta., los cuales no fueron contestados.

A fs. 110 y vta. dictaminó el Sr. Fiscal.-

III. Que el apelante solicitó se revoque el decisorio que confirma la determinación de oficio y la multa aplicada, con costas al Fisco Nacional. Sostiene la inconstitucionalidad del decreto 493/01, al considerar que una ley que transfiere al Ejecutivo la atribución legislativa de derogar **exenciones** no comporta un supuesto de legislación delegante sino de deslegalización, Agrega que la ley 25.414 fue derogada por la ley 25.556, con la consecuente derogación de todas las normas en su consecuencia. Argumenta, por otro lado, que la ley 25.414 fue dictada con vigencia hasta 11/3/02, por lo que el bloque normativo de emergencia dictado en el marco de dicha ley no pudo abarcar hechos o situaciones verificadas con posterioridad a dicha fecha, como sucede en el caso. Finaliza resaltando la notoria inconstitucionalidad en relación al art. 76 de la Constitución Nacional y cuestionando la asignada a relaciones jurídicas nacidas con posterioridad al vencimiento del plazo de la emergencia. Se agravia a su vez de los intereses y la multa impuesta.

IV. Que, por su parte, la parte demandada, al contestar agravios, citó lo dispuesto por el art.7 inc. h punto 11 de la Ley del Impuesto al Valor conforme lo cual, están exentos "los espectáculos de carácter deportivo amateur, en las condiciones que al respecto establezca la reglamentación, por los que constituyan la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos". Sostuvo que las **exenciones** son dictadas por el Poder Legislativo en el ejercicio de las facultades que le son propias en materia tributaria y que el bloque normativo de emergencia constituido por la Ley 25.414 y Decreto 493/01 mantiene vigencia para los períodos posteriores a la referida derogación efectuada por la Ley 25.556. Concluye que la ley 25.556 no se refiere a las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades delegadas por la Ley 25.414.-

V. Que, en primer término, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones. (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires S/Ordinario sentencia del 17/11/87; esta Sala, in re: "Wemer, Tomás M. C/ B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98, entre muchos otros)

VI. Que, a efectos de dilucidar la cuestión, es necesario centrar la atención en la delegación dispuesta por el art. 1 de la ley 25.414, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a crear y derogar **exenciones**.

Al respecto, atento al principio constitucional de reserva de ley "nullum pena sine legem", **no puede convalidarse la derogación de una exención a través de un decreto, siendo el poder legislativo el único órgano facultado para hacerlo.**

En este sentido se expidió el Sr. Fiscal General cuando expuso:"Según tiene declarado la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, su propia Jurisprudencia resulta categórica, en cuanto a que "los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas", y concordantemente con ello ha afirmado que carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del estado investido de tales atribuciones (.). Por lo demás, agregó el Alto Tribunal que no pueden caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida, en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (conf. doctrina de Fallos: 326:4251 y sus citas). A mi modo de ver, en forma análoga a lo que acontecía en el mencionado precedente, la falta de límites con que fue dispuesta la delegación impugnada autoriza a estimarla inconstitucional en los términos de la estricta doctrina allí citada, cuando también es del caso recordar que, en materia de exenciones impositivas, es constante el criterio conforme al cual deben resultar de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador (conf. Fallos: 289:508; 292:129 y 302: entre muchos otros)".

Por ello, es que corresponde revocar la resolución del Tribunal Fiscal del 2 de Agosto de 2003, dejando sin efecto la resolución nº 168/03 y declarar inconstitucional la ley 25.414 en cuanto delegó la facultad de derogar y exenciones, y por consiguiente el decreto 493/01.

VII. Que, con relación a las costas de ambas instancias, no existen razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo que deberán ser soportadas por la demandada vencida (arg.art.68 CPCCN).

Por ello y concordemente con el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE:

1º) Revocar la resolución del Tribunal Fiscal del 2 de Agosto de 2003, dejando sin efecto la resolución nº 168/03 y declarar inconstitucional la ley 25.414 en cuanto delegó la facultad de derogar exenciones, y por consiguiente el decreto 493/01, con costas de ambas instancias a la demandada vencida.

2º) Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, oportunamente devuélvase.

Se deja constancia que se encuentra vacante una de vocalías de esta Sala. (confr. art. 109 del RJN).-